

## AGUA

Iba a escribir de otra cosa. Pero estos días lo que nos sobra es tiempo. Y a última hora me llega por telegram una noticia que merece comentario.

El Gobierno decretó que mientras dure el encierro no se pueden cortar los suministros básicos- agua, luz, gas- por impago. Una orden lógica para evitar que el encierro, que para mucha gente ha significado una caída vertical de ingresos, se convierta en tragedia. La noticia que, aparece en el digital Público, es que la patronal AGA, que reúne a las empresas del sector exige que se acote esta orden para impedir que con la excusa del encierro haya una fuga masiva de pagos. Y por tanto que se les permita hacer cortes cuanto sea necesario. El miedo que declaran las empresas es totalmente injustificado. Los recibos de los suministros básicos están mayoritariamente domiciliados y sólo dejará de pagar quien no tenga fondos, o sea quien necesita esta protección. La demanda de AGA oscila entre lo malvado o lo ridículo, pero posiblemente es un MacGuffin (esta falsa pista que se inventó Hitchcock para que nos despistáramos de la línea principal de sus films). El mismo artículo aclara la cuestión. Las compañías de agua se enfrentan, como el resto de sectores, a una drástica caída de demanda. Sobre todo, en la industria y en las actividades turísticas. Y lo que están buscando es que con su "sacrificio" aceptando impagos el Gobierno les acabe garantizando ingresos. Les haga un rescate a la medida.

La gestión del agua en España es de titularidad pública. Pero su gestión está en muchos casos cedida a empresas privadas. El mercado está en manos de pocos grupos: Agbar (del grupo francés Suez Environment, en el que tiene una participación la Caixa), Aqualia (de la constructora FCC), las constructoras Acciona y Sacyr y Aguas de Valencia (controlada por la familia Calabuig). Un oligopolio que tiene en sus manos un suculento negocio (que en diversas ocasiones ha acabado en denuncias de corrupción) y que ahora hace otro envite para sacar otra tajada. En Barcelona lo sabemos bien. Agbar ha realizado toda serie de maniobras para mantener el negocio del área metropolitana, bastantes de evidente juego sucio. Si ahora el negocio es ruinoso estas empresas lo tienen muy fácil, que renuncien a sus contratos y dejen la gestión en manos de los Ayuntamientos, que, en lugares como Terrassa, el Prat o Mataró se han mostrado eficientes gestores del servicio.

Mientras no podemos aceptar que estas empresas traten de utilizar como rehenes a la gente pobre, para conseguir que su fraudulenta demanda tenga éxito. Y por esto el movimiento en defensa del agua pública está ya preparando acciones.